

Justo García Sánchez, *Principio jurídico romano de alcance supranacional, fundamento de un contencioso del siglo xx: la Regla «Accessorium sequitur principale»*. Desde mediados del siglo xix, a consecuencia del Concordato celebrado entre España y la Santa Sede, suscrito por Isabel II y el papa Pío IX, surge una reforma de las Colegiatas, entre las cuales se encontraba la de Covadonga. El abad era, desde el siglo xvii, al mismo tiempo que máxima dignidad en la persona jurídica del santuario mariano, una de las más relevantes de la catedral de Oviedo, aunque residía habitualmente en el Real Sitio, muy distante de la capital del Principado de Asturias. No obstante, ganaba las retribuciones catedralicias sin tener que soportar las cargas ordinarias de la prebenda. La disputa jurídica se plantea a finales del siglo decimonónico porque los canónigos ovetenses pretenden intervenir activamente en la vacante producida al fallecer el titular, al partir de la premisa de dos personas jurídicas diferentes, una en Covadonga y otra en Oviedo. De las tres *regulae iuris* invocadas en el contencioso, la primera, *culpa caret qui scit, sed prohibere non potest*, a partir de D. 50, 17, 50. Paulus lib. XXXIX ad Ed., trata de preservar el posible derecho que asiste a los canónigos de Oviedo, no obstante la actuación del prelado Martínez Vigil, que había convocado la prebenda al margen del cabildo. La segunda regla se toma del *Liber Sextus*, In VI, 5, 1, 55: *qui sentit commodum et onus sentire debet*, lo cual implica que sólo podrá percibir los frutos de la prebenda cuando participe en las actividades de la misma. La tercera, que incide directamente sobre el fondo del litigio y tiene carácter determinante, es la del *accessorium sequitur principale*, In VI, 5, 12, 42. Esta regla nace del instituto jurídico de la accesión romana respecto de uno de los modos de adquirir la propiedad, y a tenor de la misma en normativa e interpretación canonística el abad de Covadonga tiene esa dignidad en la colegiata del santuario como principal, al ser la primera de dicha persona jurídica, mientras que la prebenda catedralicia es accesoria de la misma y, por consiguiente, la vacante se produce respecto de la primera, que automáticamente implica con su provisión la adjudicación de la segunda.

Luis Álvarez Prieto, *Hacia un nuevo concepto de matrimonio y familia*. Desde hace varios años se viene observando un cambio en cuanto se refiere al concepto de matrimonio, igualando, o pretendiendo hacerlo, las uniones matrimoniales a las uniones de hecho, tanto homosexuales, como heterosexuales, mediante la interpretación, creo que forzada, de los artículos 10 y 14 en relación con los artículos 31, 1.º y 39 de la Constitución Española. Consecuentemente, ello conlleva pretender el reconocimiento de la igualdad jurídica de unas y otras uniones con el consiguiente juego de la exigencia de determinados derechos mientras se soslaya o disfraza las consiguientes obligaciones.

Tanto desde el punto de vista civil como del canónico, el matrimonio es considerado la unión estable entre hombre y mujer con unos fines que impone el *Codex*.

Desde otro ángulo, los Códigos civil o canónico, tanto el período constitutivo del matrimonio, como en el extintivo, exigen unos determinados requisitos, así como someterse a ciertas formalidades u obligaciones que entran dentro del concepto del *ius cogens*, y, por tanto, inderogables. En cambio, ya que a otras uniones no se le imponen tales requisitos, por ello, tanto la unión propiamente dicha, como la ruptura, puede realizarse a voluntad.

Como puede suponerse, todo cuanto antecede ha traído como consecuencia una alteración de la idea de matrimonio, acercándolo a las uniones de hecho, o al revés, lo que ha acarreado una modificación de la idea de familia. La familia actual es una familia disgregada, falta de autoridad hacia los hijos, los cuales, en no pocas ocasiones, carecen de norte; la rebeldía normal a la autoridad paterna adquiere límites insospechados; las relaciones sexuales y la promiscuidad se inician en épocas muy tempranas; los embarazos no deseados son muy frecuentes, etc.

Frente a todo ello, en nuestro entorno cultural se está intentando que los miembros de la familia, aun respondiendo a roles diversos, tienden a que se actúe en beneficio de la comunidad; los hijos vienen obligados a contribuir con el producto de su trabajo al acervo común; se intenta respetar la personalidad de los hijos y su predisposición física e intelectual; rige el principio de libertad religiosa; se estimula la formación social; pero sobre todo se exige la necesidad de apoyo estatal a la familia, reconociendo la trascendencia social que la familia tiene.

José San José Prisco, *La nulidad de la ordenación sacerdotal: Proceso y causas*. El presente artículo presenta, por un lado, el nuevo proceso administrativo para la declaración de la nulidad de la ordenación sacerdotal emanado de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos a finales del año 2001, con el fin de sustituir las normas anteriores de 1931, acomodándolas a la nueva codificación; y, por otro, realiza un estudio de las causas por las que se podría solicitar dicha nulidad. La presentación del nuevo proceso incluye, además de la traducción del texto latino, algunos breves comentarios añadidos para su mejor comprensión. El estudio de las causas por las que se puede acusar nulidad aborda los temas de la materia y forma empleadas, el ministro y el sujeto capaces de administrar y recibir el sacramento y las condiciones para que la recepción de la ordenación se haga con la debida libertad e intencionalidad, destacando los aspectos de la violencia, el miedo grave y otras causas de orden psíquico.

F. R. Aznar Gil, *Normas sobre la disolución del vínculo matrimonial no sacramental. Texto y comentario*. El 16 de febrero del 2001 fueron aprobadas por S. S. Juan Pablo II las nuevas normas que regulan el proceso para la tramitación de la disolución del vínculo matrimonial no sacramental, y que sustituyen a las promulgadas el 6 de diciembre de 1973. Las normas respetan, lógicamente, el principio establecido en el canon 1141: la absoluta indisolubilidad, intrínseca y extrínseca del matrimonio, se refiere al matrimonio rato, esto es al celebrado entre bautizados (can. 1055, § 2), que ha sido consumado (can. 1061, § 1). Doctrina recordada recientemente por el actual Romano Pontífice. Estas normas, que no afectan a los supuestos comprendidos en los cánones 1143-1147 y 1148-1149, constan de un amplio

prefacio, en el que se presenta sintéticamente la evolución histórica operada en esta materia, y de un total de veinticinco artículos divididos en dos partes, sustantiva y procesal. Y debemos recordar que, muy previsiblemente, el recurso a este proceso será cada vez más frecuente en países como el nuestro, dado el aumento de población no bautizada a consecuencia de los movimientos migratorios que se están produciendo en la actualidad.

José Ignacio Alonso Pérez, *Reflexiones canónicas sobre el reconocimiento dado a las «parejas estables» en España*. Desde 1998 buena parte de las Comunidades autónomas españolas han introducido leyes que reconocen alguna eficacia a la convivencia fuera del matrimonio, a semejanza de lo que ha acontecido en la mayor parte de Europa. Al mismo tiempo se constata que el panorama matrimonial español está cambiando a gran velocidad. En el presente estudio se analiza el contenido que el legislador ha querido dar a expresiones como «uniones de hecho» o «parejas estables» y cuál es la relación de éstas con el matrimonio civil. De otra parte, se pone de manifiesto la variedad presente en el Derecho canónico matrimonial aplicable a las personas que contraen matrimonio en el nuevo contexto multicultural y multireligioso de España, teniendo en cuenta la diversidad normativa que ofrecen los dos códigos canónicos —CIC y CCEO— y la diversidad jurídica y confesional de los contrayentes. Desde estos presupuestos se estudian tanto la legitimidad formal canónica del recurso a las figuras de 'pareja' reconocidas en la legislación civil, según la situación confesional de los contrayentes, como la similitud-disimilitud de estas uniones con la *forma sacramenti* del matrimonio. Finalmente se afronta la posibilidad de recurrir a la recuperación matrimonial en sede canónica (convalidación y sanación) de estas parejas. Se restaura en este trabajo la distinción entre matrimonios inválidos y matrimonios inexistentes, concediendo relieve también a la diferencias entre las «uniones civiles reconocidas» y las simples «uniones de hecho».

Carlos Salinas Araneda, *El influjo del Derecho canónico en el Código civil de la República de Chile*. El Código civil de Chile se promulgó en 1855, siendo Chile un Estado confesionalmente católico, lo que significó que el Código, tal como lo expresara el entonces arzobispo de Santiago, «en lo relativo a la religión y a la Iglesia descansa en sólidos principios» y «no parece que quiera atropellar a la Iglesia». Es por lo que en su elaboración, entre el conjunto de fuentes que manejaron los codificadores, el Derecho canónico no estuvo ausente y ejerció un notable influjo en treinta y seis de sus disposiciones, de las cuales más de la mitad todavía se encuentra vigente. En este trabajo se presentan todos los artículos del Código civil en los que es posible definir un influjo directo del Derecho canónico, lo que se hace utilizando las categorías en uso para explicar las conexiones entre los ordenamientos estatales y el Derecho de la Iglesia. Se distinguen, así, aquellas normas en las que hay una remisión material o recepticia de aquellas en que la remisión es simplemente formal; se agregan aquellas normas en las que el Derecho canónico actúa como presupuesto y se incluyen algunas normas en las que es posible advertir un influjo implícito directo. Se han dejado de lado aquellas en las que hay un influjo implícito general —como personas jurídicas— con la sola excepción de algunas reflexiones en torno al concepto de matrimonio que proporciona el Código civil. Cuando la norma ha

dado lugar a ello, se explica la jurisprudencia judicial o administrativa que se ha generado en la aplicación del referido artículo, no siendo extraño el caso en que, con ocasión de dicha aplicación, la jurisprudencia haga explícitas consideraciones canónicas.

José Luis Morrás Etayo, *La normativa particular de la Iglesia en España sobre el archivo histórico diocesano*. Los archivos históricos diocesanos son considerados bienes culturales. La legislación universal de la Iglesia se refiere a ellos de forma muy general y deja a la legislación particular la regulación más detallada de los mismos. Este artículo hace referencia a todo lo que es propio del legislador particular: la constitución del archivo histórico y las condiciones del edificio donde se alberga, los fondos que lo componen y la concentración de archivos, la protección jurídica del archivo, el gobierno del mismo a cargo del archivero y su personal auxiliar y finalmente la regulación de su disfrute, dotándolo de un reglamento que recoja el acceso al mismo, los medios de descripción y la reproducción de los documentos. En la parte final se pasa de la teoría a la práctica y tras una encuesta enviada a todos los archiveros de España se constata la situación real de nuestros archivos y se recogen una serie de propuestas que los mismos archiveros hicieron con una doble finalidad: mejorar el archivo y delimitar la figura del archivero.

Justo García Sánchez, *The Roman Juridical Principle of Supra-National Scope, basis of a 20<sup>th</sup> century contention: The Rule: «Accessorium Sequitur Principale»*. About the middle of the 19<sup>th</sup> century a reform of the Collegiate churches arose —among them Covadonga— as a result of the Concordat between Spain and the Holy See, signed by Isabel II and Pope Pius IX. Since the 17<sup>th</sup> century the Abbot of Covadonga had been one of the most important people of the cathedral of Oviedo as well as the person of highest rank in the juridical person of the Marian Sanctuary, although his usual residence was the Royal Country House, a great distance from the capital of the Asturian Principality. Nonetheless, he received the cathedral stipend without having to fulfil the duties attached to the prebend. The juridical dispute arose at the end of the 19<sup>th</sup> century because the Oviedo canons tried to actively intervene in the vacant abbacy when the incumbent died, based on the premise of two distinct juridical persons, one in Covadonga and the other in Oviedo. Of the three *regulae iuris* invoked in the contention, the first, *culpa caret qui scit, sed prohibere non potest*, from D. 50, 17, 50. Paulus lib. XXXIX ad Ed., tries to protect the possible right of the Oviedo canons, despite the actions of the Prelate Martínez Vigil who had set up the prebend separate from the chapter. The second rule, is taken from the *Liber Sextus*, In VI, 5, 1, 55: *qui sentit commodum et onus sentire debet*, which implies that only he who participates in the activities of the prebend can enjoy its fruits. The third which is of a decisive nature and directly affects the basis of litigation is the *accessorium sequitur, principale*, In VI, 5, 12, 42. This rule has its roots in the juridical principle of roman accession regarding one of the ways of acquiring property. In accordance with this principle in normative and canonistic interpretation the abbot of Covadonga has the highest rank in the Collegiate of the Sanctuary, because he is the first juridical person, while the cathedral prebend is accessory to the same,

and therefore the vacancy is produced with respect to the first which automatically implies with its provision the adjudication of the second.

Luis Álvarez Prieto, *Towards a New Concept of Marriage and Family*. Over the last several years there has been a noticeable change with regard to the concept of family; a change which equates, or at least tries to equate, matrimonial unions and *de facto* unions —homosexual as well as heterosexual— through an interpretation (which I believe to be forced) of articles 10 & 14 in relation with articles 31-1.<sup>o</sup> & 39 of the Spanish Constitution. As a direct result of this, there has been an attempt to recognise the juridical equality of both these types of union and the subsequent demand of certain rights, while ignoring or avoiding the resulting obligations.

From the point of view of both civil and canon law, marriage is considered the stable union between a man and a woman with certain ends imposed by the Codex.

From another perspective, both civil and canonical codes insist on certain conditions in the constitution or dissolution of a marriage, such as fulfilling certain formalities and obligations which fall within the concept of «ius cogens», and are therefore binding. With regard to other unions such conditions are not imposed, and therefore the union and the dissolution can be carried out at will.

All of this has brought about a change in the idea of matrimony, bringing it closer to *de facto* unions, or rather it has led to a change in the idea of family. The modern-day family is a family in disintegration: there is a lack of authority towards children who in turn often lack purpose; rebellion towards parental authority reaches new heights; sexual relations and promiscuity begin at even younger ages; unwanted pregnancies are common, etc.

Faced with this cultural situation, attempts are being made to encourage family members, although they have different roles to play, to work for the benefit of the family *community*; children are obliged to contribute from their earnings to the common family purse; there is an attempt to respect the personalities of the children and their physical and intellectual predispositions; religious freedom prevails; social formation is encouraged; but most of all state recognition of the family as that which transcends society is essential.

José San José Prisco, *Nullity of priestly ordination: process and causes*. On the one hand, this article presents the new administrative process for the declaration of nullity of priestly ordination which was issued by the Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments towards the end of the year 2001, with the intention of substituting the existing norms of 1931, updating them in the light of the new Code; on the other, it offers a study of the causes for which such nullity may be sought. The presentation of the new process includes, as well as the translation of the Latin text, some brief additional commentaries in order to better understand it. The study of the causes for which one may allege nullity include the themes of the matter and form used, the minister and the subject capable of administering and receiving the sacrament, the necessary conditions for ordi-

nation to be received with due freedom and right intention, highlighting the aspects of violence, grave fear and other causes of a psychological nature.

F. R. Aznar Gil, *New Norms on the Dissolution of the Non-sacramental Matrimonial Bond. Text and Commentary*. On the 16<sup>th</sup> February 2001 Pope John Paul II approved the new norms which govern the process of the dissolution of the non-sacramental matrimonial bond. These norms replace those promulgated on 6<sup>th</sup> December 1973. The norms logically follow from the principle established in c. 1141: the absolute indissolubility, both intrinsic and extrinsic, of marriage refers to a ratified marriage, celebrated between two baptised persons (c. 1055, 2), which has been consummated (c. 1061, 1). A doctrine recently reiterated recently by the Roman Pontiff. These norms—which do not affect that which has been previously established in cc. 1143-1147 and 1148-1149—are made up of an ample preface which presents in synthesis the historical evolution of this material, and a total of twenty five articles in two parts, substantive and processual. We must also remember that recourse to this process will become more frequent in countries like our own, given the increase of a non-baptised population resulting from present day immigration.

José Ignacio Alonso Pérez, *Canonical reflections on the recognition given in Spain to «stable couples»*. Since 1998, many of Spain's regional authorities have introduced laws which give some recognition to co-habitation outside marriage, as has happened in most of Europe. At the same time we can observe that pattern of marriage in Spain is changing very quickly. This present study analyses the content that the legislator has wanted to give to expressions like «*de facto* unions» or «stable couples» and compares them with civil marriage. The article also seeks to demonstrate the current variety within canon law which is applicable to those who contract marriage in the new multicultural and multi-religious context of Spain, taking into account the diversity of norms which the two codes—the *CIC* and the *CCEO*—offer, and the juridical and confessional diversity of those who contract marriage. On this basis, the article studies both the formal canonical legitimacy of have recourse to the types of «couple» recognized in the light of their confessional situation, and also the similarity/dissimilarity of these unions with the *forma sacramenti* of marriage. Finally, the author looks at the possibility of canonically rectifying (convalidation and sanation) the unions of these couples in order to effect a marriage. This study restores the distinction between invalid marriages and non-existent marriages, conceding however that there is also a difference between «recognized civil unions» and simple «*de facto* unions».

Carlos Salinas Aranedá, *The influence of Canon Law on the Civil Code of the Republic of Chile*. The Civil Code of Chile was promulgated in 1855, when Chile was an officially Catholic state. This meant that the Code, as the then Archbishop of Santiago said, «when dealing with religion and the Church, is based on solid principles» and «does not seem to want to crash into the Church». This is because, when the Code was being prepared, Canon Law was well represented among the sources which those who elaborated the Code had at their disposal. In fact, Canon Law

played a notable part in thirty six of their dispositions, of which half are still in force. This article presents all the articles in the Civil Code in which it is possible to define the direct influence of Canon Law; this is done by utilizing categories in use in order too explain the connections between the ordinances of the state and the law of the Church. Thus the distinction is made between those norms in which there is a material borrowing or reception and those where the borrowing is purely formal; the author gathers together those norms in which Canon Law acts as a given and he includes some norms in which it is possible to detect a direct and implicit influence. He leaves aside those norms in which there is a general implicit influence—for example, juridical persons—with the sole exception of some reflections concerned with the concept of marriage that the Civil Code provides. Where the norm has inspired this concept, the judicial and administrative jurisprudence which has been generated by the application of the article in question is explained; it comes as no surprise that, when such an application is made, that jurisprudence makes explicit canonical considerations.

José Luis Morrás Etayo, *The particular norms in the Church in Spain regarding the historical diocesan archive*. The historical diocesan archives are regarded as cultural assets. The universal legislation of the Church only refers to them in a very general way and leaves more detailed regulations to particular legislation. This article refers to all that is proper to the particular legislator: the setting up of the historical archive and the conditions of the building in which it is kept, the funds which comprise it and the grouping of the archives, the juridical protection of the archive, the control of same, the role of the archivist and his assistants, and finally the rules for its use including access and the means to describe and reproduce documents. In the last part, the author passes from theory to practice and, in the light of a questionnaire sent to all the archivists in Spain, he states the real situation of our archives and gathers together a series of proposals which archivists themselves made with a double purpose: to improve the archive and to better define the figure of the archivist.